

RODOLFO RIVAROLA



SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

CONFERENCIA

DADA EL 18 DE ABRIL DE 1900 EN EL COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES



BIBLIOTECA CORTE	
Nº. L	2775
UB. L	5.35
FICHA MATERIA	

LA PLATA
TALLERES SESE Y LARRAÑAGA, 47 Y 9
1900



SEÑORES:

Hace ya algunos años, sin que me sea preciso precisar el número, que recorriendo por primera vez la altísima barranca, donde un poco al Sur de Mar del Plata comienza el Cabo Corriente, contemplé, ya abandonado pero soberbio sobre el mar y en la falda de la verde colina, el grandioso edificio que debió ser el Saint James Hotel. Las paredes sin reboques; las aberturas sin puertas ni ventanas; la soledad en los vastos salones y de las salas menores, la hierba alzándose alta del piso y de las grietas de las paredes, dábanle un aspecto que imagino de viejo castillo feudal abandonado y en próxima ruina. No sé quien entonces me dijo, ni sé tampoco si me dijo verdad, al anunciarme que se debatía una cuestión judicial apropiada de aquella construcción. Desde entonces he vuelto muchas veces a aquellos sitios, pero nunca he pedido noticias del quizás presunto pleito que convirtiera en ruinas el comenzado palacio. He tenido así, naturalmente, muy naturalmente, quiero decir sin asombro ni extrañeza alguna, la idea de que allí estaba la obra de un pleito. Más aún, he mirado al techo del edificio, cuyas cornisas se caen a pedrazos, y mi imaginación ha fingido todo aquello desplomándose bajo el peso de un expediente colosal, de un mamotreto en que habría intervenido todo el foro con su Curia Filipica y sus Caravantes y Condes de la Cañada, sus Demolombe y sus Dalloz, sus citas de la jurisprudencia y sus códigos, y sus memoriales, autos y notificaciones interminables, ¡interminables!

Puede ser que no haya nada de cierto en lo del pleito, y no sea más verdadero que lo del fantástico expediente bajo cuyo peso debían crugir los tirantes de aquel edificio.

Presumo de prolijo en la prueba de los hechos, y no me satisface la declaración de un solo testigo, y mucho menos no recordando sus condiciones y cualidades para pesar su testimonio; pero si no es verdad que un pleito ha hecho ruinas de la fábrica hermosa, si solo la sutil lagartija da testimonio de vida y movimiento en aquel sitio destinado a solaz humano, sin que sea causa de ello ningún proceso judicial: tenía entonces y tengo hoy mismo a la vista, y al alcance de mi mano al escribir las notas de esta conferencia otro ejemplo auténtico y nada dudoso de la obra destructora del pleito. Aquí están, oscuros y mugrientos, con sus cubiertas andrajosas, y asomando algunas hojas amarillas, como el mendigo muestra las carnes a través de sus andrajos, los autos de un juicio de concurso iniciado en Mayo de 1870. ¡Treinta años de proceso judicial! No un palacio solitario sobre el enhiesto barranco, sino una casa a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, ha permanecido treinta años en completo abandono, bajo la influencia perniciosa del pleito, mientras el palan-palan, surgiendo de las grietas de los muros próximos a derrumbarse, ha vencido, y coronado el edificio hasta imponerle su nombre.

Aunque de poco tiempo atrás se haya mostrado en aquella casa la acción repa-



radadora de una administración mejor, el proceso no ha concluido; y junto con la nueva vida que hoy la anima, no sería difícil que nuevas cuestiones surgieran en aquel terreno tan fecundo en litigios. De la lista de acreedores verificados al iniciarse el concurso, unos han muerto, otros se han enriquecido y olvidado sus créditos; algunos en la miseria y en la ruina, soñarán todavía con el percibo de su dinero, como el hambriento con el succulento manjar que no probará. Solo quedan en pie, dispuestos a litigar, el acreedor hipotecario de la finca que hace treinta años piensa en su capital é intereses, y el Banco de la Provincia, otra lastimosa y triste ruina.

¡Cuántos otros innumerables ejemplos podría presentarse, no solo de las cosas materiales que dan testimonio de tanto daño sino de los sufrimientos, de los poemas de dolor moral, de la miseria, desolación y envilecimiento de familias enteras que vivieron esperando justicia y murieron, perdida ya toda esperanza!

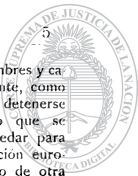
En todos los años que van corridos desde que fué escrita al frente de una constitución llena de generosas y nobles promesas, la fórmula *afianzar la justicia*, se ha dictado códigos que han puesto á contribución la experiencia entera de la humanidad durante muchos siglos: la lenta pero segura formación del derecho romano hasta su condensación definitiva por los grandes jurisconsultos de la época de Justiniano; la enorme sabiduría y previsión sagacísima de los códigos españoles del Rey Sabio, escritos en aquella lengua semi-rústica pero tan sabrosa que se gusta al pronunciarla como el buen vino añejo; la sangrienta reivindicación de la Revolución francesa, imponiendo á toda la raza europea el reconocimiento de los *derechos del hombre*; la codificación napoleónica fijada como modelo hasta más allá de la raza, en los códigos del Japón; la legislación nortea-

americana, sobre cuyo ejemplo se calcaron nuestras instituciones políticas, todo esto no ha bastado, como quizás no basta en otras partes, para realizar este sencillísimo principio del *suum cuique, á cada uno lo suyo*, cuando alguien reclama lo que le pertenece ó se dice perjudicado y ofendido en su derecho.

Y no es que háyamos quedado rezagados en nuestro concepto de la justicia, considerándola como una rama administrativa destinada á dirimir contiendas exclusivamente de interés privado. Hemos tenido desde el primer momento la concepción americana de un poder independiente, destinado á conservar el imperio de la Constitución, á mantener el equilibrio de los poderes; á asegurar la libertad y el derecho de los ciudadanos concediéndole las facultades del habeas corpus, la admirable institución inglesa que garantiza la libertad individual. Más aún: hemos entendido el principio de justicia, el *suum cuique*, al derecho político, pensando que al amparar el derecho del ciudadano de elegir sus mandatarios, habríamos asegurado el funcionamiento regular de nuestras instituciones liberales, suprimido las revoluciones que retardaron medio siglo la civilización nacional, y alejado de la elección de los poderes públicos todo medio de violencia y de engaño.

Todavía más: hemos previsto que el ejercicio habitual ó profesional de administrar justicia podría constituir á los jueces en una casta que se creyera superior á la ley misma, de cuya ejecución debían ser instrumentos fieles, y las leyes fundamentales y orgánicas hablan de la responsabilidad de los magistrados, y prevén las formas del enjuiciamiento.

Después de tanta legislación, con cuya enseñanza, explicación y comentarios, las Facultades de derecho, fatigan la inteligencia de los jóvenes aspirantes á una carrera profesional; con que, ya



abogados, éstos fabrican las elucubraciones que tantas veces oscurecen el sentimiento de la justicia; con leyes que abren tantos caminos á los jueces para extraviar alguna vez su propio é individual criterio de la verdad, preguntémonos si hemos alcanzado la perfecta garantía del derecho privado; la perfecta seguridad de la libertad individual; el pleno ejercicio de los derechos políticos, y la fácil responsabilidad de los magistrados á quienes se ha confiado todo el tesoro de las instituciones.

En verdad que proponer estas cuestiones es abusar de la ironía: y tratarlas es exponerse á caer en lo que son ya los lugares comunes de un descontento vulgar. Es digno de una cultura más amable disimular los defectos propios y ajenos, entregando al tiempo y al destino la tarea de corregir la humanidad; y es sin duda alguna más simpática la fisonomía del que se siente feliz *quand même*, que la del sombrío conspirador, la del revolucionario airado ó la del filósofo pesimista, gruñon y malhumorado.

Con tales peligros, apenas si me atrevo á afirmar que no es posible sonreír ante los males que han perturbado, perturban y perturbarán la prosperidad y el engrandecimiento nacional. No hay que considerar solo la que podría ser pequeña ó mezquina cuestión del acreedor que envejece y muere sin percibir el dinero que dió; ó del despojado que padece miserias mientras reivindica lo suyo; ó del inocente encerrado por meses en la cárcel por imputación calumniosa; ó del elector en ridícula actitud de sorpresa al no permitirsele votar diciéndosele que ya ha votado; ó del juez que prevarica por todo una década, antes de formularsele acusación en solemne proceso. No: coloquémoslos en otra altura para contemplar un horizonte más extenso. La inseguridad en la propiedad privada y en el crédito

detiene la inmigración de hombres y capitales, y en todo país naciente, como en todo organismo temprano, detenerse es retroceder;—este desierto que se llama la Argentina puede quedar para siempre desierto si la emigración europea encuentra bajo el amparo de otra organización social, aunque fuera sobre un suelo menos generoso, la protección de la vida, de la propiedad y del honor tan caros al hombre. Puede fácilmente suceder con un país extraño lo que sucede con las distintas regiones de nuestro propio país: la inmigración y la misma población de la República se condensan en la Capital en una proporción estupenda, porque merced al influjo de muchas y variadas circunstancias, no obstante muchos defectos institucionales y muchos peligros reales, se encuentran allí, en mayor medida, las seguridades y garantías cuya falta es más sensible á medida que se trata de una región más alejada de aquel centro.

Sin embargo, ni allí mismo el crédito se siente seguro, ni es cierto que los ciudadanos estén á cubierto de los abusos de la autoridad que ponen en peligro la preciada libertad y la reputación del inocente. Se siente el efecto de los procedimientos que alientan el fraude, la chicana y el abuso de la autoridad; y sin referirme á hechos en comprobación de estos juicios, bastaría recordar las tentativas de reformas de la legislación que se han insinuado en el Congreso. Se ha reconocido más de una vez, en extremo favorecedora del fraude, destructora del crédito, ruinosa para el comercio honesto, la tramitación actual de las quiebras, cuyo activo en su totalidad ó en su mayor parte, queda invertido las más de las veces en los gastos de la liquidación. En nombre de los intereses bancarios y del alto comercio, se ha pedido la simplificación de los trámites del pro-



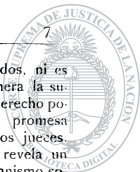
testo, aunque sin acertarse a mi juicio, a garantizar al mismo tiempo los derechos del supuesto deudor; en nombre de los grandes intereses comprometidos en préstamos hipotecarios, se ha proyectado algunas reformas del juicio ejecutivo, que aunque destinadas a tener vigencia solamente en la Capital Federal y Territorios nacionales, el ejemplo sería eficaz, imponiéndose a todo el país por la fuerza de la imitación; por último, en orden a la mayor garantía de la libertad y de la reputación y seguridad personal, ha partido de iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, la reforma de la organización judicial, proyectándose sin vacilaciones, la supresión de una pésima justicia de instrucción, cargada ya con las odiosidades de una baja tiranía, aunque también sin acertarse, a mi juicio, con los medios orgánicos y procesales que deben reemplazarla, como intenté demostrarlo en el modesto libro *La Justicia en lo Criminal*, publicado hace algunos meses.

Todas estas iniciativas y las proyectadas reformas de la codificación, demuestran a la vez que se tiene conciencia de ser deficientes las leyes actuales para los anhelados fines de la justicia, y de que se mantiene viva la esperanza de que con adecuados retoques de leyes y tribunales pueda aproximarse al ideal de un fácil é inmediato *suum cuique*.

Pero, si de lo que atañe sólo al interés privado, pasamos la vista a la intervención judicial atribuida por la ley en los asuntos directamente vinculados con el orden político, quizás no sea posible pensar ni en la simplificación de los procedimientos judiciales, ni en la sanción de las penas, ni siquiera en la existencia misma de las leyes. No hay acto del procedimiento electoral; a que no se haya creído dar suficientes garantías con la sanción de una pena y la intervención del Juez para su aplicación. ¿Cuáles son los resultados prác-

ticos? ¿Es posible que se acuerde la mínima eficacia a las penas y procedimientos judiciales, contra el fraude electorales ó contra el abuso de la fuerza, mientras el mal ejemplo y la burla de la ley vengan de todas partes, así de los encargados de los poderes públicos, como de los jefes de partidos, como de los comités, como de cualquiera agrupación de ciudadanos que se organice para ejercitar el derecho electoral? Sobre este punto, no podemos ni siquiera saber si los procedimientos judiciales escogitados para amparar el sufragio de los ciudadanos, son ó no adecuados. El país se encuentra en la misma tristísima situación en que se hallaría si a pesar de tener el Código Civil que declara el derecho privado, el Código penal que protege el derecho con las sanciones penales, y los procedimientos y las leyes orgánicas para la aplicación de uno y otro, una porción de los habitantes por una parte y los encargados de la fuerza pública por otra, se hubiesen tacitamente complotado para impedir que las sentencias de los jueces fueran respetadas y cumplidas.

En cuanto a los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados declarada por las leyes, son hasta hoy tan difíciles que parecen imposibles, ó relegan a vana ilusión aquella garantía de la justicia. Salvo la Provincia de Buenos Aires, que, buena ó mala, tiene una ley de enjuiciamiento de magistrados, no conozco otra en la República. El enorme foco de la población del país, que se llama ciudad de Buenos Aires, no la tiene. Por obra de la ley misma, al no haber legislado el procedimiento para la responsabilidad, y por obra de una jurisprudencia formada con olvido de las discusiones legislativas que fijaron el carácter de la justicia ordinaria de la Capital Federal, como un cuerpo distinto del poder judicial creado por la Constitución, se ha entendido



que tales magistrados no estaban sugetos á otro tribunal que el Senado, ni á otro acusador que la Cámara de Diputados.

Tal procedimiento, si puede servir para separar de su puesto á un juez que por muchos años y en repetido número de casos faltara notoriamente á deberes elementales de su cargo, ó incurriera en delitos manifiestos, está muy lejos de garantizar el derecho de un individuo víctima de la malevolencia ó parcialidad del mismo Juez. Esperar á que haya cien ofendidos para separar el mal juez, y evitar que ofenda á cien más, no es garantizar el derecho de los primeros cien, y mucho menos el de los primeros noventa y nueve si no se producía el centésimo caso. La responsabilidad de los magistrados no puede quedar limitada, por otra parte, á la separación ó condena del juez en desagravio de la conciencia pública: para el damnificado, lo importante y lo justo á la vez es la indemnización de los perjuicios que ha sufrido: la condena del juez á otras penas, sólo puede inspirarle un interés muy remoto, si acaso no le parece una ironía esa separación después que le ha causado el daño, y no antes de causarlo.

He recorrido hasta aquí las generalidades, y recordado los hechos suficientes para llegar á esta primera conclusión: si bien la Constitución Nacional formuló como aspiración suprema del país la de *afianzar la justicia*; si en su consecuencia se dictaron los códigos nacionales que, en el fondo del derecho, han declarado principios jurídicos que cuentan con la experiencia y la sabiduría de siglos; si en el orden político se ha reservado á los ciudadanos el derecho de elegir sus mandatarios, y colocado este derecho bajo el amparo de la justicia; si contra el infiel desempeño de los jueces se ha declarado en principio la responsabilidad de los magistrados, ni el derecho privado, sea el que se refiere á la libertad y el honor de los habitantes,

están suficientemente asegurados, ni es otra cosa que una vana quimera la supuesta garantía judicial del derecho político, y es poco menos que promesa vana, la responsabilidad de los jueces.

Con esta triste verdad se revela un vicio profundo de nuestro organismo social y político; y cómo pensar que estén asegurados «los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino» mientras nos hallamos tan lejos de poder afirmar sobre todas las pasiones de las contiendas privadas, y sobre todos los delitos contra el derecho político, la autoridad augusta y solemne de la justicia, una é igual para todos? El engaño tiene una mala calificación en moral y en derecho. El que promete para obtener un beneficio ó una ventaja, sabiendo que no puede cumplirla y que no la cumplirá, hace algo más que mentir, y no quiero decir lo que hace. Hay verdades muy amargas, y quiero abandonar pronto este argumento para no decir que los argentinos estamos engañando al mundo entero con nuestras promesas de justicia y libertad cuando vivimos con tanta frecuencia en la revuelta, en la desigualdad y en la injusticia.

Se ve desde este punto que la obra de la justicia está por hacerse: que existiera siquiera sus cimientos, cuando esa mentira estampada en el preámbulo de la Constitución nacional, sirve siquiera como ideal, como inspiración suprema de todo corazón bien puesto, que nadie se atreverá á borrar ni á tocar, mientras el nombre argentino no haya caído en mayores desgracias y pasado á la historia, suprimiéndose del porvenir.

Quisiera en estos momentos disponer de mayores fuerzas que las escasísimas que poseo, y poder consagrarlas integramente al estudio y solución del gravísimo problema que afecta nuestro país.



Bien se que es fácil criticar y que es difícil crear; que es fácil declamar contra el vicio y difícil estirparlo.

Pero en este punto preciso de mis anotaciones, me llega como enviado expresamente, para ratificación, de los problemas denunciados, un diario insospechable de oposición sistemática «El País», en que leo esta casi repetición de lo que acabo de escribir: Este país, abierto para todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo, necesita ponerse en condiciones que importen un aliente para que esa declaración constitucional se realice en todo su alcance. Cuando la preciedad no es respetada fuera de los grandes centros de población, en que la justicia es más eficiente; cuando la vida misma de los habitantes está expuesta en los parajes lejanos, y cuando todavía nuestro organismo político se resiente de las convulsiones revolucionarias, no vemos qué ventajas se puede ofrecer al extranjero etc.

No puede, pues, sospecharse de crítica de un descontento la que viene en tales términos confirmada por un órgano de las influencias políticas hoy predominantes.

Pero ¿cuales son los remedios de los que pueda esperarse alguna mejora de nuestra situación?

He aquí la pregunta que formulo demasiado tarde para los límites a que debo circunscribir este trabajo, ocupado hasta ahora en determinar la existencia, carácter y consecuencias del mal.

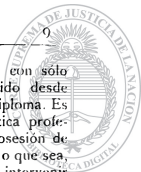
Es preciso reconocer, desde luego, que tiene mucha parte de verdad el viejo aforismo de que no bastan las leyes cuando no existen las costumbres. Sería, pues, una obra previa, algo así como la construcción de sólidos cimientos, la formación de las costumbres, difundiendo, más que la instrucción que puede ser utilizada para el mal, la educación de la conciencia del deber y el sentimiento de la justicia, en su acepción más

elevada, *constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere*.

Es verdad que si esa difusión fuera tan general y completa en un pueblo feliz, la autoridad y las leyes mismas serían superfluas; pero no entiendo referirme a una edad de oro, sino meramente exigir una proporción mayor de la gente educada en principios de honestidad y de justicia. Más aún, limito la exigencia a lindes más reducidas, y todavía suficientes para influir con eficacia en la prosperidad nacional: bastaría que esa conciencia del deber y ese sentimiento de la justicia animaran al mayor número de los que ejercen la autoridad pública, cualquiera que fuese su rango y condición.

Aparte de estos elementos que deberían ser peculiares a todos los funcionarios públicos, el desempeño de la magistratura judicial requiere una ilustración tan completa como sea posible, en la ciencia vastísima del derecho y sus anexas. Sobre este punto, los poderes públicos a quienes se confía la designación de las personas que deben componer la magistratura judicial, parecen referirse exclusivamente al título de suficiencia expedido por las Facultades de Derecho.

Dentro de una lógica estricta, este criterio puede parecer irremediable: ni el Poder Ejecutivo ni el Senado podrían creerse autorizados para tomar exámen de derecho al candidato para una judicatura, que posee su título expedido por una Universidad. Pero con criterio más positivo y próximo a la verdad, hay que reconocer que si todos los títulos que emanan de las diversas Facultades de Derecho de la República, son iguales entre sí en cuanto a habilitar al postulante para el ejercicio de una profesión, no todos corresponden a sujetos que hayan demostrado iguales aptitudes ó probado idéntica competencia. Alguien demuestra en las aulas un natural despejo, una clara y fácil inteligencia de las menudas distinciones del derecho, una casi



expontánea concepción de los principios fundamentales, unido todo ello a la expresión correcta y precisa de las ideas, que sólo se adquiere mediante una buena preparación auxiliar científica y literaria. Otro ha bregado inútilmente con la gramática o ha sido indolente con ella, y no ha llegado a dominar la ortografía; no hablemos de otras ciencias y otras letras. Ha pasado por la Facultad dando repetidas muestras, así, de que naturaleza no le ha favorecido con lo que Salamanca no podría prestarle, como de una indolencia incompatible con los esfuerzos que exige la ciencia. Los dos reciben en el mismo día diplomas idénticos, sin otra variante que el nombre de cada uno; pero repugna al mínimo criterio de verdad, considerar a estos dos hombres igualmente aptos para elejir el ejercicio profesional o la magistratura. Y sin embargo, nada más común que ver al segundo ocupar fácilmente los puestos judiciales, y declarar desde allí el derecho, perfectamente inconciente de su propia ignorancia. He oído referir a un distinguido hombre público y distinguido profesor de derecho, las vacilaciones de una comisión de exámenes generales para la aprobación de uno de estos. La dificultad fué resuelta benévolamente por un académico y profesor, muy distinguido también, que la decidió con su palabra y con su voto. Tres meses después el jóven abogado presentaba al Tribunal un escrito en que trataba de chicanero é ignorante al abogado contrario..... y este era el eminente profesor que había decidido su aprobación. Dos años más tarde el agresivo letrado era ya Juez!

Otro de los requisitos que fijan las constituciones y las leyes orgánicas para la designación de un magistrado judicial, es el de que tenga el candidato algún número de años en el ejercicio de la profesión de abogado ó en el desempeño de algún empleo judicial. En algunos casos me parece que se ha tenido

por satisfecha esta condición con sólo contarse el tiempo transcurrido desde que el postulante recibió su diploma. Es bien evidente que una práctica profesional no se prueba por la posesión de un diploma, por más antiguo que sea, pues el poseedor en lugar de intervenir activa y continuamente en los litigios, puede haber permanecido absolutamente extraño a los mismos por falta de clientela; y no es por otra parte de creerse que el que tuviera abundante clientela, la abandonara para pasar a la carrera judicial, escasamente remunerada.

Además, no debe entenderse tan materialmente y al pié de la letra que el requisito de la práctica profesional ó del desempeño de un empleo judicial, basten por sí solos para crear las aptitudes. No son sino un dato para que los poderes públicos que deben hacer el nombramiento, se informen de estas aptitudes, y conozcan no sólo la *cantidad* sino también la *calidad* de la práctica.

Es ya tiempo de que se piense seriamente en nuestro país en la preparación y reclutamiento de los hombres a quienes se entrega el más noble y digno ejercicio de las funciones públicas, y no sea la magistratura, como en algún caso, refugio de algún incapaz que nunca alcanzó la ciencia ni la conciencia de su puesto.

Tengo el mayor aprecio, el mayor respeto, y casi confesaria gran admiración, hacia algunos jueces, dignos y rectos, que imponen a toda maledicencia el mas profundo silencio, por el alto sentimiento de justicia que prevalece constantemente en sus resoluciones; pero su influencia no se extiende más allá de los casos que, según la distribución de las jurisdicciones, caen bajo su competencia; y del ejemplo que pueden dar a los que más de cerca les contemplan. Fuera de esto, ellos no pueden hacer otra cosa mas que lamentarse de los vicios notorios que afligen a la administración de justicia, como a todas las demás insti



tuciones públicas, y esperar que la evolución de nuestro organismo nos lleve alguna vez á mejores tiempos.

Aún sin darle mayor importancia de la que pueda tener en realidad, pienso que sería útil la creación del registro ó matricula de aspirantes á la judicatura y puestos del Ministerio Público, llevando continua información del número é importancia de los asuntos en que intervienen y las soluciones favorables ó desfavorables que alcanzan. Podría ser á cargo de los mismos aspirantes, como mérito para su elección, la defensa gratuita de pobres é incapaces, así como el desempeño auxiliar de las funciones del Ministerio Público, con informes anuales de superiores y jueces ante quienes se hubieran desempeñado. También el ingreso al cuerpo de aspirantes podría estar sometido á algunas restricciones, y tener por base el éxito con que hubieran realizado los estudios facultativos, las condiciones de moralidad y buena conducta, etc.

Hechos, por decirlo así, los hombres aptos para la magistratura; alejada en lo posible por la ley, la influencia de la mera simpatía ó del favor personal en su nombramiento, habríamos obtenido, —hablo siempre con mucha relatividad— un poco de materia prima para la realización de la justicia y podríamos dar un paso más rectificando la organización y simplificando los procedimientos.

No entiendo que pueda esperarse hoy ninguna modificación de los vicios electorales con entregar á la justicia la represión de los delitos contra la libertad del sufragio. La penalidad y el consiguiente procedimiento en esta materia suponen épocas normales en que el delito sea la excepción y no la generalidad, tratándose de funciones políticas. Debo, por tanto, apartar este problema, que es en nuestra condición política, de ardua, quizás imposible solución. Nadie puede decir adonde llegaremos por este camino

cuando el pesimismo ha invadido todas las almas y ha hecho caer sin fuerzas todos los brazos.

Pero, puesto que con frecuencia hago alusión á la condición política del país, permítaseme una breve digresión para justificar mis reflexiones en este punto.

—Un sabio maestro me inculcó ciertos principios en forma tan clara y precisa, que quedaron grabados en mi espíritu como lo hubiera hecho el cincel en la plata. Don José Manuel Estrada, perdido tempranamente para la patria y para la ciencia, pero no sin haber realizado ya una dignísima obra, dejó en mí con aquella frase que dibujaba las ideas en la memoria del oyente, el concepto de que la más fuerte razón de la libertad política era la de servir de egida á la libertad civil. Por él y de él aprendí que «la libertad no consiste en el cambio de las personas llamadas á ejercer las funciones políticas; no consiste en que la soberanía resida en un hombre ó en la masa social: consiste en la reglamentación del ejercicio de la autoridad; en la preexistencia solemnemente reconocida de todos los derechos civiles; en la organización de un orden jurídico suficientemente sólido para resguardarla contra los caprichos y las veleidades de los hombres investidos de poder.»

Estrada concebía como «objeto principal de la sociedad el de organizar la libertad civil, es decir, organizar un orden jurídico dentro del cual puedan desenvolverse todos los derechos y jugar todos los intereses legítimos.»

Estas ideas dejaron tan fuerte sello en mi pensamiento que si bien he sido y soy como era mi maestro sinceramente republicano; si concibo y admito como admita él que el régimen federal puede convenir á nuestro país, no concibo la república ni el federalismo como fines sino como medios de realizar, según los pueblos y las épocas, la más extensa libertad civil.

No tengo duda alguna de que una



buena organización judicial que admitiese una adecuada simplificación de los procedimientos, sería, por lo menos en teoría, la concepción de un método para hacer más eficaz la libertad civil. Pero mientras la fuente misma del poder público, el sufragio popular, sea como es por regla general en nuestro país, una evidente mentira, ó una sangrienta disputa, con buena ó mala organización judicial, con procedimientos sencillos ó complicados, estará siempre en peligro la propiedad, la libertad y el honor de las personas. El organismo social es de tal complejidad que la alteración en el funcionamiento de uno de sus órganos, altera y perturba la totalidad.

Reasumiendo ahora el tema principal de este discurso, diré en qué condiciones concibo la organización y el procedimiento judicial.

Las bases generales conciden necesariamente con las que he sostenido como aplicables especialmente á la justicia en lo criminal.

Desde luego, toda organización judicial y todo procedimiento deben tener fijamente presentes estos dos propósitos esenciales:

1º Realizar el derecho.

2º Realizarlo en el minimum posible de tiempo.

De estas dos bases la primera lleva el orden de colocación que por su preferencia merece. Pero no quedaría completamente satisfecha la aspiración social de la justicia, si la realización del derecho se verificara con las demoras con que hoy se verifica. Interviene el tiempo, como factor importantísimo en la materia, y lo que dura la perturbación del estado de derecho que motiva el litigio, es realmente un daño considerable que queda siempre sin reparación, cuando no imposibilita absolutamente la eficacia de la declaración del derecho. De esto podría ser evi-

dente ejemplo cada litigio que se inicie en cualquier tribunal de la República.

Por otra parte hay que mantener la distinción que surge de la naturaleza misma de las declaraciones del derecho, entre los actos de jurisdicción voluntaria, y los de jurisdicción contenciosa.

Los actos de jurisdicción voluntaria podrían simplificarse mucho, descargando á los jueces de un considerable despacho, que aunque sea de firma, es siempre una pérdida de tiempo.

En estos casos, toda la tramitación que está fijamente marcada por la ley y que convierte el procedimiento en una serie de actos puramente materiales, que no pueden ser otros sino los establecidos, la intervención y firma del juez, no tiene hoy una explicación suficiente. En otros tiempos la legislación era más complicada y su conocimiento más difícil; á la vez que parece que la preparación media de los escritos era inferior á la actual, así por las menores exigencias en los exámenes respectivos como por menores estímulos de estudio una vez recibidos. Pero después de la vulgarización de los códigos, en que se metodizó el derecho moderno; y se puso al alcance de todos, si bien las cuestiones de fondo han continuado y continuarán siendo abstractas y de solución difícil, aún para los que consagren la vida entera al estudio del derecho, las relativas á la sustanciación de los juicios son, con frecuencia, tanto ó mejor conocidas por los secretarios que por los mismos jueces. No se ve hoy la necesidad de que el Secretario que recibe el escrito y documentos de la iniciación de un juicio de testamentaria, deba limitarse á ponerle el cargo respectivo y entregarlo al juez para su lectura y resolución correspondiente. Ya sabemos que no es esta la costumbre, y que las cosas pasan realmente de otra manera. Precisamente sostengo que debe llevarse el



procedimiento a lo que ocurre en la realidad de las cosas; la intervención del juez podría limitarse a la declaración de la apertura del juicio, y a la aprobación de la liquidación del mismo mientras no surjan incidentes que exijan una resolución. No es necesario hacerle intervenir en juntas, nombramientos de peritos, aprobación especial de cada operación de que estos den cuenta, y otra serie de actos en que su intervención es supérflua desde que medie el acuerdo y consentimiento de partes. No me detengo en el estudio especial de las disposiciones del procedimiento que podrían ser modificadas en este sentido, porque ello, por la extensión y cuidado que requeriría no es propio del objeto general de este momento.

En cuanto a la jurisdicción contenciosa, ó sea a la sustanciación y fallo de las causas civiles en que se controvierte el derecho de las partes, tengo como ideas fundamentales:

1° La institución de tribunales colegiados, de única instancia en cuanto a los hechos;

2° El debate oral del pleito;

3° La continuidad de la discusión y fallo;

4° La casación, ó en su defecto los recursos conocidos en la Provincia, por de inaplicabilidad de ley ó doctrina.

Concibo estas bases como parte de un sistema; y en consecuencia, sistemáticamente si se quiere, digo que rechazo la supresión de cualquiera de estos elementos de la organización y procedimiento. Así, pues, no admitiría jamás la única instancia con el juez único; ni para la declaración definitiva del derecho; ni el conocimiento simultáneo de múltiples causas como existe hoy, ni la simple apelación, ineficaz para asegurar el derecho y fijar la jurisprudencia; ni la discusión escrita que no deja suficientes garantías de haber si-

do, no digo estudiado, comprendido, ni siquiera leído!

Sostengo la institución de los tribunales colegiados por razones fácilmente percibidas. Sean ó no las mayorías una expresión de verdad y acierto, lo que en sí mismo es muy relativo, se puede admitir, aún dentro de los principios de una lógica rigurosa, que las posibilidades de error disminuyen cuando varios individuos, en condiciones análogas de observación y de juicio tienen que pronunciarse sobre una misma cuestión. La presunción de mayor acierto en un tribunal colegiado cuenta entre nosotros con una sanción indiscutible: la de una larga y general opinión. Todos los tribunales superiores que existen en la República, son colegiados, y salvo los casos de menor cuantía, de la Justicia de Paz, toda sentencia es susceptible de apelación ante un tribunal compuesto por lo menos de tres jueces.

Las garantías de acierto, ó por lo menos de confianza que los litigantes podrían depositar en el tribunal, son susceptibles de aumento con la intervención de conjueces ó jurados calificados para la decisión de los hechos.

Esta forma de la organización del tribunal es análoga a la declarada por la Constitución de la Provincia desde 1873 y no cumplida nunca por la ley. La Constitución defirió la prueba de los hechos controvertidos en las causas civiles y comerciales al jury, siempre que lo pidiera cualquiera de las partes. «El jury limitará su veredicto, dice la Constitución, a declarar los hechos que hubieran sido probados y los que no lo hubieran sido.»

He publicado antes de ahora mis ideas respecto del jurado en materia criminal y he expresado mi desconfianza en el tribunal de personas no peritas en la apreciación lógica de las pruebas; pero al mismo tiempo he sostenido, con el mayor convencimiento, la bondad de los



procedimientos del jurado ante tribunales colegiados de personas entendidas. Tratándose de la justicia civil, los interesados tienen para la elección de jueces una libertad que no es conveniente acordar cuando se trata del derecho criminal, en que va siempre comprometido el interés público. Por esto admito la posibilidad de que los litigantes pidieran la agregación al tribunal que debía decidir sobre los hechos, sea de conjuces letrados, sea de personas competentes en la materia principal del pleito, por ejemplo, de ingenieros si se tratara de construcciones, de comerciantes si se tratara de actos comerciales, de médicos si se tratara de la incapacidad mental de las personas, de agricultores o ganaderos si se tratara de cuestiones rurales, etc.

He considerado siempre un procedimiento lógico y perfectamente adecuado para la solución de las cuestiones de derecho, el pronunciamiento previo y definitivo respecto de los hechos. Conozco las dificultades y objeciones del sistema. Estimo que este requiere una preparación y un trabajo más asiduo de parte de los jueces y que por la naturaleza misma de las cuestiones es difícil algunas veces, acertar con el deslinde del hecho y del derecho. Pero nuestras leyes de codificación son, y no se concede que sean otra cosa más que la resolución correspondiente a los hechos jurídicos que prevén; y esto solo basta en mi opinión, más que para justificar, para declarar imprescindible la separación de las cuestiones.

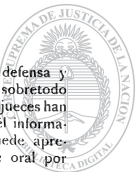
Por la fuerza de los principios de clarados en la Constitución de 1873, los Tribunales de la Provincia han tenido que entrar poco a poco, y con las resistencias consiguientes a toda imposición de un nuevo trabajo, en la realización de la expresada separación de cuestiones.

Basta revisar los fallos de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Provincia para observar que no obstante muchos defectos de método y de exposición, las soluciones judiciales adquieren una precisión que en vano puede buscarse en las copiosas colecciones de fallos de los otros Tribunales. Aún los de la Capital Federal que han conservado para sus sentencias la forma de acuerdo previo, han prescindido de la determinación de las cuestiones, limitándose en todos los casos a la expresión de esta fórmula: *¿Es justa la sentencia apelada?*

La decisión de un tribunal constituido con suficientes garantías respecto de los hechos, suprime la apelación, entendida como nuevo juicio y nueva sentencia que podría contradecir lo declarado por la primera. Según la Constitución, de las resoluciones del jury se concedería únicamente, lo que a mi juicio con error, llama *apelación*, porque solo se trataría de un recurso "para resolver sobre la legalidad de los procedimientos y de la prueba estimada por el jury".

Cuando se ha buscado en un Tribunal convenientemente organizado las garantías de acierto que es posible hallar, no hay razón que justifique el sometimiento de la causa a un nuevo tribunal en grado de apelación. Si presumimos que el juicio de tres, de cinco, de siete ó más individuos, pronunciándose en apelación, puede decidir con acierto sobre la verdad de los hechos ¿porqué no admitir que esos mismos hombres tendrían el mismo acierto cuando se pronunciaran en un juicio de primera instancia? ¿Porqué no someterles entonces directamente, y por única vez la decisión de los hechos? Trayendo la cuestión a procedimientos conocidos, si nuestras Camaras de Apelación tienen facultad para pronunciarse ampliamente sobre el hecho y el derecho, y dictar la sentencia que debió pronunciar el juez de primera instancia, y si es excepcionalmente raro el caso que no vaya en apela-



ción porque no admitirse que sería igualmente buena la sentencia de la Cámara, si se hubiese pronunciado directamente?

Acostumbrados por tradición y por imitación a considerar como más acertada una sentencia de segunda instancia que una de primera, creemos quizás que la conveniencia de la apelación sea indiscutible, probablemente porque consideramos solo los actuales tribunales de primera instancia y no pensamos que la supresión del recurso será conveniente previas todas las garantías posibles en el tribunal único. La apelación ha encontrado siempre y en todos los tiempos sabios y decididos opositores. Ulpiano (Dig. XLIX) se pronunció sobre ella con esta profunda ironía: «No hay quien no sepa como es frecuente la apelación, y cuanto es necesaria, puesto que corrige la iniquidad o la impericia de los fallos; aunque frecuentemente haga peores los fallos dados según la justicia; pues pronunciarse último no significa pronunciarse mejor».

Y para concluir sobre este punto que por sí solo requiere un tratado especial, recordaré que la instancia única ya está sancionada por nuestras leyes y admitida por nuestros procedimientos para casos tan importantes como son todos los de jurisdicción originaria de la Corte Suprema de la Nación ó de la Suprema Corte de la Provincia.

El debate oral del pleito me parece de una superioridad manifiesta respecto de la discusión escrita de los actuales alegatos, si puede llamarse discusión la presentación individual de escritos no comunicados recíprocamente. Para los abogados el debate oral exige una preparación más completa, un estudio más perfecto de la causa, un método más preciso de exposición, contribuyendo todo ello a la dilucidación del pleito. Para las partes presentes a la audiencia, mayor seguridad de haber sido defendido, y mejores elementos para juzgar por sí

mismos de la eficacia de la defensa y de la justicia de su causa, y sobretudo el convencimiento de que los jueces han oído el debate, y están por el informado de las cuestiones. No puede apreciarse lo que sería el debate oral por los cortos ejemplos que podemos encontrar en los informes *in voce* ante nuestros tribunales superiores; —pero he oído a más de un juez de esos tribunales expresarse satisfactoriamente respecto de la eficacia de esos informes, cuando son el resultado del estudio serio del asunto y se exponen con método y claridad.

Hago de la continuidad de la discusión y fallo, un requisito esencial del sistema, cuando parecería esta una cláusula de relativa utilidad, y nada más. El debate oral requiere por su naturaleza misma el fallo inmediato, y la única forma de ser inmediato es la de pronunciar la sentencia, antes de pasar a la audiencia y examen de otra causa. Sería una presunción contraria a la experiencia la de suponer que todas las razones dadas hoy verbalmente podrían ser retenidas dentro de dos meses por los jueces que las escucharon; pero la dificultad aumenta notoriamente si se piensa que ese espacio de tiempo, se hubiera oído la discusión de diez ó veinte causas más.

Correspondería a las previsiones de la ley orgánica y de los procedimientos, establecer de qué manera los principios que he expuesto deberían recibir su aplicación para realizar los fines de una justicia mejor. Instruido el juicio en términos conciliables con las garantías que requiere la defensa del derecho, las cuestiones de hecho quedarían fijadas y en estado de someterse a la decisión del tribunal. En este estado se oiría el debate sobre las pruebas y el tribunal resolvería sin levantar la audiencia ó en una audiencia inmediata, pero sin pasar á ocuparse de otra causa, sobre las cues-



tiones de hecho sometidas á su decisión. El debate podría haberse adelantado también hasta formular las conclusiones de derecho ó reservarse para después de resueltas las cuestiones de hecho, todo lo que implica la oralidad del juicio con la consiguiente seguridad de que todos los jueces se han hallado en la misma aptitud de tomar el necesario conocimiento de los hechos y oír todas las razones de las partes.

Pero, como en la organización actual de las sociedades, la justicia tiene la única misión de declarar y aplicar el derecho, y el derecho está escrito en la ley, salvo lo previsto para los casos de omisión, un tribunal con una preparación superior y exclusiva dedicación á los pronunciamientos de derecho, mantendría con los recursos de casación ó de inaplicabilidad de ley, el verdadero entendimiento de la misma facilitando progresivamente la declaración del derecho.

Los recursos de inaplicabilidad de ley son suficientemente conocidos en la Provincia: diré sólo que la razón del recurso es la misma que la de los recursos de casación establecidos en la justicia de los países europeos: tienen principalmente en vista la observancia más rigurosa de la ley, y contribuyendo á la interpretación de la misma, fijan la jurisprudencia y facilitan su aplicación. Nuestros recursos difieren de la casación principalmente en esto: que una vez declarado por el tribunal el error ó falsa aplicación de la ley en la sentencia recurrida, nuestra Suprema Corte pasa á hacer las veces del Tribunal de Apelaciones y pronuncia la sentencia que éste debió dictar, mientras que los Tribunales de casación se limitan á anular la sentencia que infringió la ley y pasarla al Tribunal correspondiente para el nuevo juicio ó el nuevo fallo. Hay muchas razones para que así sea, cuya consideración dejaré para otro momento.

En lo sustancial, los principios generales de este procedimiento no se alejan mucho de la concepción que tuvieron los constituyentes de 1873 para la Provincia de Buenos Aires. He oído con frecuencia juicios respecto de la obra de aquella Convención, en que estuvieron reunidos como en ninguna otra, los más altos representantes de la intelectualidad argentina, que aquella era la obra de teorizadores, que aplicada á la práctica ha dado resultados contrarios á los fines propuestos. No he podido conformarme nunca con la supuesta justicia de esta crítica respecto á todas las partes de aquella obra; y hoy mismo, cuando en presencia de tristes consecuencias á que se ha llegado; se cree todavía culpable de ellas á la concepción constitucional, no me avengo á reconocer que el estado contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires sea consecuencia de la fantasía de teorizadores que legislaron para un pueblo imaginario. Los que tal hablan, olvidan que la Constitución fué dictada para un Estado que mantenía suficientemente viva y fuerte la relativa soberanía que la Constitución Nacional reconoce á los Estados Federales. Se trataba entonces de una Provincia que tenía el más grande y poderoso centro urbano de la República; que tenía marcado por su situación un camino seguro hacia el engrandecimiento material que después ha adquirido. Era, por la fuerza de opinión pública una garantía de cierta realización del sistema Federal. Tenía un núcleo de ilustración, de ciencia, y de riqueza cuya expansión necesaria ha llegado hasta lo que es hoy la Capital de la República. Era sobre todo, la cabeza de un organismo aún no bien educado, pero completo en las partes esenciales de la vida. Aunque se haya observado por algunos sociólogos con bastante razón quizás, que la sociedad no es propiamente un organismo, sino que la vida orgánica suministra simplemente términos de com-



paración que facilitan la expresión de las cuestiones relativas a la vida social, lo lo que me parece indudable es que el lenguaje de la biología es positivamente cómodo y claro cuando se habla en sociología. No quiero, pues, abandonar el término de comparación y merced a ello quiero fijar bien mi concepto de la antigua y la nueva Provincia de Buenos Aires. Concibo la primera como un cuerpo joven y robusto, con su propia cabeza, inteligente y fuerte para regir sus movimientos de defensa de su propia existencia. Cualesquiera que hayan sido las consecuencias y las conveniencias de la Nación para darsle por Capital esta cabeza, ya que la Nación no tenía ninguna, lo cierto es que para la Provincia el hecho importó una decapitación: decapitar es también quitar la Capital. Lo que es un cuerpo en que se agita la vida animal cuando se le separa la parte más esencial para la actividad, así fué la Provincia cuando se halló de pronto sin cabeza, y lo que es peor todavía, en la necesidad de fabricarse una que de todas maneras tendría en su iniciación el cerebro blando é inconsistente de los recién nacidos. La Provincia no tenía otra ciudad que pudiera servir de cabeza adecuada para reemplazar la antigua y verificar el prodigio que hasta ahora no se ha realizado sino en los cuentos fantásticos, de poner a un cuerpo la cabeza de otro. En este caso se agregó al cuerpo de gigante una cabeza de niño y como esta última no tenía ideas, fué necesario, y se diría que parece hasta hoy indispensable, que viva de las ideas ajenas, si solo se atiende á que su política y sus intereses económicos son debatidos por otras cabezas, como si esta no supiera pensar todavía. No es así ya felizmente, el niño crecerá y conquistará

su capacidad de lo que dan indicio muchas iniciativas intelectuales surgidas en esta ciudad.

Cuando son evidentes aquellos hechos, no es posible culpar de falta de acierto á los constituyentes de 1873; y si en tantas otras cosas su obra habría tenido otras consecuencias, si se hubiera desenvuelto en el medio en que fue concebida, tratándose de la justicia es muy posible que se hubiera realizado en toda su extensión el programa fijado por la Constitución, teniéndose así los elementos indispensables para juzgar con acierto de su bondad.

Pienso que con las bases fundamentales enunciadas, que cuentan con la autoridad de la Constitución de 1873, podría construirse una organización judicial y un procedimiento muy superiores á aquellos de que hoy disfruta, ó que hoy afligen á la sociedad. No obstante aquel apoyo quizás pueda culparse de una vaguedad de teoría y llamarse á estas bases, un procedimiento de fantasía, porque los principios generales no pueden mostrar nunca su eficacia sino mediante una adecuada articulación que los realice.

Y cierto aquí mi exposición sin ocuparme de la justicia en materia criminal por haber ya tratado este punto con mayor detención en otro momento. En uno y otro trabajo me he preocupado de investigar los medios de *avanzar la justicia*, siempre buscada y jamás conseguida, según las palabras de mi maestro; constantemente en presencia nuestra y constantemente alejándose como los círculos del horizonte artificial que se va a medida que avanzamos persiguiéndole.»

